



Al servicio de la Justicia y de la Paz Social

JOSE GILDARDO RAMIREZ GIRALDO
Magistrado

Referencia: EJECUTIVO
Demandante: LOGOS FACTORING COLOMBIA S.A.
Demandado: IVANAGRO S.A.
Decisión: Revoca auto
Radicado: 05001 31 03 014 2021 000390 01
Auto nro.: 032

DISTRITO JUDICIAL DE MEDELLÍN

TRIBUNAL SUPERIOR

SALA UNITARIA DE DECISIÓN

Medellín, veintitrés de marzo de dos mil veintitrés

Procede esta Sala a resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la providencia emitida el 12 de diciembre de 2022, por el Juzgado Catorce Civil del Circuito de Medellín, mediante la cual se decretó la nulidad formulada dentro del proceso de la referencia.

ANTECEDENTES:

Mediante escrito del 10 de noviembre de 2021 la sociedad Logos Factoring Colombia S.A. promovió demanda ejecutiva en contra de la sociedad Ivanagro S.A.; librándose orden de apremio el 10 de noviembre de 2021. Luego de surtido el trámite en escrito del 6 de septiembre de 2022 la entidad demandada formuló incidente de nulidad al considerar que no se le había notificado en debida forma.

El Juzgado, en providencia del 12 de enero de 2022, accedió a la solicitud de nulidad al estimar que la notificación al demandado no fue efectiva, pues el correo electrónico se quedó en cola para la

entrega, sin que fuera debidamente recibido por la destinataria. Dicha decisión motivó la interposición del recurso de reposición y en subsidio el de apelación. Por auto del 8 de febrero último se negó el recurso horizontal y se concedió la alzada.

Como fundamento de su disenso sostuvo que la parte demandada valiéndose de tecnicismos sin fundamento, intenta alegar su propio descuido y negligencia al dejar de verificar la notificación enviada, pues como lo certifica la empresa Domina S.A.S. en efecto se acusó recibido, según certificación anexa; indicó que pretender obtener una nulidad por indebida notificación soportada en una falta de revisión cuidadosa de sus sistemas y buzones de correo electrónico es cohonestar con la actuación dolosa por parte de la resistente. En suma, solicitó revocar el auto atacado y en su lugar negar la solicitud de nulidad.

Corrido el traslado a la parte contraria, esta no se pronunció, por lo que siendo la oportunidad para resolver a ello se procede previas las siguientes

CONSIDERACIONES

Las nulidades son irregularidades que se presentan en el marco de un proceso, que vulneran el debido proceso y que, por su gravedad, el legislador les ha atribuido la consecuencia –sanción- de invalidar las actuaciones surtidas. A través de su declaración se controla entonces la validez de la actuación procesal y se asegura a las partes el derecho constitucional al debido proceso.

Como es sabido, el artículo 133 del Código General del Proceso dispone que:

"El proceso es nulo, en todo o en parte, solamente en los siguientes casos:

(...)

8. Cuando no se practica en legal forma la notificación del auto admisorio de la demanda a personas determinadas, o el emplazamiento de las demás personas aunque sean indeterminadas, que deban suceder en el proceso a cualquiera de las partes, cuando la ley así lo ordena, o no se cita en debida forma al Ministerio Público o a cualquier otra persona o entidad que de acuerdo con la ley debió ser citado.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 29 de la Constitución, el debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas y, entre otras garantías, nadie puede ser juzgado sino con observancia de la plenitud de las formas propias de cada juicio. La norma en mención consagra un derecho fundamental de obligatoria observancia para todas las autoridades públicas y en especial en el trámite de un proceso judicial.

Por su parte, el artículo 11 del C. General del P. reza: *"Al interpretar la ley procesal el juez deberá tener en cuenta que el objeto de los procedimientos es la efectividad de los derechos reconocidos por la ley sustancial. Las dudas que surjan en la interpretación de las normas del presente código deberán aclararse mediante la aplicación de los principios constitucionales y generales del derecho procesal garantizando en todo caso el debido proceso, el derecho de defensa, la igualdad de las partes y los demás derechos constitucionales fundamentales. El juez se abstendrá de exigir y de cumplir formalidades innecesarias"*

En tal sentido, la publicidad de las decisiones judiciales hace parte del núcleo esencial del derecho fundamental al debido proceso, como quiera que todas las personas tienen derecho a ser informadas de la existencia de procesos o actuaciones que modifican, crean o extinguen sus derechos y obligaciones jurídicas.

De hecho, sólo si se conocen las decisiones judiciales se puede ejercer el derecho de defensa que incluye garantías esenciales para el ser humano, tales como la posibilidad de controvertir las pruebas que se alleguen en su contra, la de aportarlas en su defensa, la de impugnar la sentencia condenatoria y la de no ser juzgado dos veces por el mismo hecho.¹

Es así como la notificación de las providencias judiciales constituye una premisa fundamental del debido proceso judicial, pues es el acto material de comunicación por medio del cual se ponen en conocimiento de las partes o terceros interesados los actos de particulares o las decisiones proferidas por la autoridad pública.

La notificación tiene como finalidad garantizar el conocimiento de la existencia de un proceso y de su desarrollo, de manera que se garanticen los principios de publicidad, de contradicción y, en especial, de que se prevenga que alguien pueda ser condenado sin ser oído. Las notificaciones permiten que materialmente sea posible que los interesados hagan valer sus derechos, bien sea oponiéndose a los actos de la contraparte o impugnando las decisiones de la autoridad, dentro del término que la ley disponga para su ejecutoria². Por consiguiente, la ausencia de notificación de las providencias judiciales podría generar violación del derecho fundamental al debido proceso y de acceso a la administración de justicia.

"En materia procesal, la lealtad de las partes y sus apoderados es un postulado fundamental del proceso, de forma tal que el comportamiento contrario al mismo suele ser reprimido con severidad por el legislador. De ahí que el artículo 37 del Código de Procedimiento Civil le imponga al juez el deber de prevenir, remediar y sancionar los actos contrarios a la

¹ Sentencia T-489-06. Corte Constitucional. Magistrado Ponente: Marco Gerardo Monroy Cabra.

² Sentencia T-419-94. Corte Constitucional. Magistrado Ponente: Eduardo Cifuentes Muñoz.

"...lealtad y probidad, y buena fe que deben observarse en el proceso...", amén de que el numeral 1º del artículo 71 ejusdem le impone a las partes y sus apoderados el deber de actuar con lealtad y buena fe en el transcurso del mismo.

En la medida en que se ha entendido que, además de la justa composición del litigio, el proceso judicial entraña la satisfacción de principios y valores esenciales para la justa y pacífica convivencia social, los aludidos de la lealtad, la probidad y la buena fe asumen una importancia específica como pauta de conducta imprescindible para asegurar la seriedad y confiabilidad de las actuaciones procesales, y, en no pocas ocasiones, como regla generadora de particulares efectos, entre ellos, inclusive, el de crear o consolidar derechos o situaciones jurídicas.

Dentro de las complejas connotaciones que a la lealtad procesal le suelen ser atribuidas, se destaca aquella en virtud de la cual se le impone al litigante la obligación de honrar la palabra dada, esto es, de no traicionar la confianza que el juez o las partes depositan en sus dichos..."

Respecto a la consecuencia de la declaración judicial por la indebida notificación al demandado, la ley prevé la sanción procesal más gravosa que implica la anulación de las actuaciones procesales surtidas con posterioridad al vicio, en tanto que lo considera un defecto sustancial grave y desproporcionado que merece especial protección del derecho a la defensa del demandado (artículo 133 del C. General del Proceso).

Así, con la entrada en vigencia de la Ley 2213 de 2022 se implementaron las tecnologías de la información en las actuaciones judiciales; sin embargo, dichas disposiciones no fueron ajenas al C. General del Proceso.

En efecto, el inciso 5º del numeral 3º del Art. 291 del estatuto procesal dispuso: *"Cuando se conozca la dirección electrónica de quien deba ser notificado, la comunicación podrá remitirse por el secretario o el interesado por medio de correo electrónico. Se presumirá que el destinatario ha recibido la comunicación cuando el iniciador acuse de recibo. En este caso se dejará*

constancia de ello en el expediente y adjuntará una impresión del mensaje de datos.”

Por su parte, el artículo 8º de la Ley 2213 de 2022 dispone que: *“Las notificaciones que deban hacerse personalmente también podrán efectuarse con el envío de la providencia respectiva como mensaje de datos a la dirección electrónica o sitio que suministre el interesado en que se realice la notificación, sin necesidad del envío de previa citación o aviso físico o virtual. Los anexos que deban entregarse para un traslado se enviarán por el mismo medio. El interesado afirmará bajo la gravedad del juramento, que se entenderá prestado con la petición, que la dirección electrónica o sitio suministrado corresponde al utilizado por la persona a notificar, informará la forma como la obtuvo y allegará las evidencias correspondientes, particularmente las comunicaciones remitidas a la persona por notificar. La notificación personal se entenderá realizada una vez transcurridos dos días hábiles siguientes al envío del mensaje y los términos empezarán a correr a partir del día siguiente al de la notificación. Para los fines de esta norma se podrán implementar o utilizar sistemas de confirmación del recibo de los correos electrónicos o mensajes de datos. Cuando exista discrepancia sobre la forma en que se practicó la notificación, la parte que se considere afectada deberá manifestar bajo la gravedad del juramento, al solicitar la declaratoria de nulidad de lo actuado, que no se enteró de la providencia, además de cumplir con lo dispuesto en los artículos 132 a 138 del Código General del Proceso.”* (Subrayas propias). Dicha norma fue replicada en la Ley 2213 de 2022 vigente en la actualidad

Una vez revisado el expediente contentivo del proceso ejecutivo se pudo establecer que en el acápite de notificaciones del libelo demandatorio el apoderado de la parte demandante, indicó que la sociedad demandada recibía notificaciones en el correo electrónico notificaciones@ivanagro.com y presidencia@ivanagro.com.

El acreedor allegó escrito en donde la empresa Domina Entrega Total S.A.S. certificó el acuse de recibido por parte de la sociedad

demandada el 01 de diciembre de 2021 a las 14:47:53 generando el código correspondiente en donde se advierte, como efectivamente lo dijera la iudex a quo, que el mismo se quedó en la bandeja de salida y no llegó al remitente, donde se visualiza “*sec Queued mail for delivery*” como estado del correo y lo que tecnológicamente se conoce como, acción del envío de correo electrónico, que se encuentra “en cola para entrega”. (Ver archivo [03ConstanciaNotificacionElectronica.pdf](#)).

Bajo esta línea argumentativa se tiene que la sociedad demandada no recibió la notificación por correo electrónico, pues pese a lo dicho por la empresa que se encargó de la certificación, en la constancia allí puesta, lo que se demuestra es que realmente no se le garantizó los derechos a la defensa y al debido proceso a la sociedad Ivanagro S.A., sin que se pueda predicar que la misma se dio acorde con las normas procesales y respetando los términos establecidos en la norma.

En atención de lo expuesto, debe esta Sala CONFIRMAR en su integridad el auto atacado.

DECISIÓN:

En mérito de lo expuesto, **LA SALA UNITARIA DE DECISIÓN CIVIL, DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN,**

RESUELVE:



Al servicio de la Justicia y de la Paz Social

PRIMERO. CONFIRMAR el auto de fecha y procedencia indicado en la parte motiva de ésta providencia.

SEGUNDO: Sin CONDENA en costas.

TERCERO. Para los efectos del inciso segundo del artículo 326 del C. General del P., se ordena comunicar lo decidido.

NOTIFÍQUESE

JOSE GILDARDO RAMIREZ GIRALDO
Magistrado